JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Noviembre tres de dos mil veintidós.

Tutela No. 1100131030272022-00442-00 de CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR PH contra JUZGADO NOVENO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE.

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR PH a través de su representante legal, acude a esta judicatura para que le sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso y Acceso a la Administración de justicia, que considera el accionante fueron vulnerados por el aquí accionado.

La tutela se fundamenta en hechos que se sintetizan, así: Que .La entidad privada CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H. Constituye un conjunto de Unidades Inmobiliarias sometidas al régimen de Propiedad Horizontal de que trata la ley 675 del 2001, tiene su domicilio en la CALLE 54F SUR NO94-18 DE BOGOTÁ D.C. y su personería jurídica se encuentra debidamente legalizada y su representación legal en cabeza de su administradora señora MAGDA LUCILA CABREJO ARDILA,.

Señala que dentro del proceso ejecutivo con numero de radicado 2019-1860 en el cual son partes CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H. VS CAPITALIZACIONES MERCANTILES, se busca el recaudo de las obligaciones que adeuda la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES, por concepto de cuotas de administración de dos locales ubicados en las instalaciones de la copropiedad que representa.

Dice que en el transcurso de dicho proceso, se han presentado varias peticiones o memoriales, entre las cuales se encuentran las siguientes: A) Auto de fecha del 6 de abril de 2022, por medio del cual se niega una nulidad por falta de competencia. B) Auto de fecha del 6 de abril de 2022, por medio del cual se requiere a la parte para que informe sobre el tramite de una medida cautelar. C) Auto de fecha del 6 de abril de 2022, por medio del cual se dicta sentencia de seguir

adelante con la ejecución y se ordena presentar la liquidación de crédito y liquidar las costas. D) que Anterior a esto habían solicitado la practica de medidas cautelares de embargo y secuestro de los inmuebles ubicados en la copropiedad. E) El día 5 de mayo de 2022, se solicitó el reenvío de los oficios de embargo sobre los locales ubicados en la copropiedad, cumpliendo desde ese momento el requerimiento del despacho. F) El día 12 de mayo de 2022, se solicitó el reenvío de los oficios de embargo sobre los locales ubicados en la copropiedad, cumpliendo desde ese momento el requerimiento del despacho. G) El día 17 de mayo de 2022, se radica un alcance a la anterior solicitud, cumpliendo desde ese momento el requerimiento del despacho. H) El día 18 de julio de 2022, se radica una liquidación de crédito, cumpliendo desde ese momento el requerimiento del despacho hecho en la sentencia. I) El día 16 de agosto de 2022, se radica un impulso procesal, solicitando celeridad en el tramite de los memoriales y de las medidas cautelares, adicional se solicitó que en virtud de los acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura se remitiera el procesos a la oficina de ejecución, toda vez que había sentencia en firme y liquidación de crédito debidamente presentada. J) El día 18 de agosto de 2022, se radica un impulso procesal, toda vez que de una revisión presencial del expediente y de lo solicitado en la baranda del despacho el expediente ni siquiera había entrado al despacho, después de 4 meses de cumplido los requerimientos. K) Posteriormente y de una revisión de la situación jurídica de los inmuebles se dieron cuenta de que dichos locales ya estaban embargados por otra entidad, en este caso por parte de la DIAN. L) De conformidad con lo anterior y de analizar la situación solicitaros por medio de memorial radicado el 20 de septiembre de 2022, solicitamos que se decretara una cautela totalmente diferente a la solicitada anteriormente.

Que Actualmente y después de seis meses desde el ultimo pronunciamiento del despacho solicitaron que se diera información sobre el expediente y el mismo aun no había entrado al despacho.

Dice que Comúnmente la velocidad de este despacho judicial es proferir una o dos decisiones por año dentro de los expedientes. Y que Desafortunadamente este caso tiene una particularidad y es que el propietario del inmueble es una sociedad inmobiliaria que tiene por objeto la administración de los locales donde opera el establecimiento de comercio denominado "SPRING STEP", sin embargo la sociedad propietaria de estos establecimientos de comercio entró recientemente al proceso de Liquidación Judicial. Por lo tanto no tardará la demandada en entrar en riesgo de ingresar o de presentar solicitud de ingreso a proceso de liquidación judicial, por lo cual el recaudo de los créditos de su representada esta en riesgo de postergarse aún más.

Que se han hecho múltiples requerimientos de manera personal al juzgado para que por favor se sirva proferir la decisión que en derecho corresponda y que dichos requerimientos no han sido atendidos en la baranda del juzgado, y que han transcurrido más de siete meses desde la presentación de la liquidación de crédito y del cumplimiento de los requerimiento y actualmente el juzgado no ha evaluado la liquidación de crédito y la solicitud de medidas cautelares, por lo cual, se puede inferir que no se dictará o emitirá providencia para la fecha límite que ya pasó en este proceso.

Informa que actualmente SPRING STEP o VD DEL MUNDO A SUS PIES, esta disminuyendo sus operaciones y como se dijo anteriormente hay un riesgo inminente en que CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A.S., pueda entrar en liquidación judicial y de esa manera entre en riesgo la posibilidad de cobro de sus créditos con dicha entidad.

Señala que La mora judicial hace que CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H., tenga que soportar por mas tiempo la tardanza y la mora judicial dentro de este proceso ejecutivo, lo cual se traduce en las siguientes situaciones: Disminución de sus ingresos de manera total por no poder materializar prontamente los secuestros y embargos dentro de este proceso. Finalmente, la mora judicial en la que incurre el despacho afecta sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que, de seguir el proceso en este despacho, se estaría sometiendo a CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H. a un pleito que puede durar varios años mas, tal cual, se ha visto en el expediente, que en promedio dura mas de 10 meses en atender las solicitudes.

Solicita que a través de este mecanismo se Se reconozca el derecho fundamental al libre acceso a la administración de justicia, de CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H., Se reconozca el derecho fundamental al debido proceso Que se ordene al Juzgado 9 de pequeñas causas y competencia Múltiple de Bogotá D.C. se atienda y se de celeridad a los memoriales y recursos que se han allegado en el proceso 2019- 1860 y adicional se sirva remitir las presentes diligencias a la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá D.C., al haber perdido este la competencia en función de los acuerdos que existen para este tema..

TRAMITE PROCESAL

Por auto de octubre 31de 2021, se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la

acción constitucional y enviaran lo pertinente sobre el proceso al cual refiere la misma.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 09 de PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE.

Manifiesta que a ese Despacho le fue repartida la demanda ejecutiva promovida por Centro Comercial Micentro El Porvenir P.H. en contra de Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., a la cual le fue asignado el radicado No. 2019-01680. Que una vez revisado el expediente en cuestión, y en lo que concierne puntualmente a las actuaciones que motivaron la queja de la referencia, es de señalar que por autos del 1º de noviembre de la presente anualidad, los cuales serán notificados por estado electrónico del 2 de los corrientes, se resolvió sobre la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, se aprobaron las costas liquidadas, se reconoció personería a la apoderada designada por la parte demandada y se requirió al extremo actor previo a darle trámite a su solicitud de medidas cautelares.

Señala que ese Juzgado no ha enviado procesos a ejecución debido a las exigencias de dicha oficina para recibir los expedientes correspondientes, las cuales, en todo caso, no pueden ser cumplidas por el Despacho teniendo en cuenta las deficiencias tecnológicas y de personal ya anotadas.

Junto con la contestación allego copia del expediente antes referido.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura el **CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR PH** a través de su representante legal, para que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y se ordene al Juzgado 9 de pequeñas causas y competencia Múltiple de Bogotá D.C. se atienda y se de celeridad a los memoriales y recursos que se han allegado en el proceso 2019- 1860 y adicional se sirva remitir las presentes diligencias a la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el **CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR PH** a través de su representante legal.

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es el **JUZGADO NOVENO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE** de esta ciudad.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al **Derecho del Debido proceso**, en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho de defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho .

El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso, que se entiende como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”. Tal derecho, siendo de aplicación general y universal “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.

De conformidad con la disposición anterior, los artículos 229 Superior y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, cuyo contenido ha sido definido por la alta Corporación como *“la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”*¹

Entonces, aquella prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.

De los hechos narrados en la petición de tutela, la respuesta dada por el Juzgado accionado, el amparo solicitado no tiene prosperidad, por cuanto ya se dio impulso al proceso, dando trámite y resolviendo las peticiones hechas por la parte actora, tal como se indica en la contestación de la tutela y en los autos proferidos con fecha primero de noviembre del corriente año.

En el escrito de contestación de la tutela, el Juzgado accionado justifico la mora en resolver las peticiones.

En cuanto al envío del proceso a los Juzgados de Ejecución de sentencias, una vez se haya resuelto lo pertinente sobre la medida cautelar, y que se encuentre en firme la liquidación de costas es procedente el envío del expediente, por consiguiente no puede ordenarse que se remita como lo solicita el accionante, toda vez que se deben cumplir protocolos para ello.

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados; pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ha sido superada, la decisión que dicte no tiene ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión del acusado.

Téngase en cuenta que lo pedido en tutela, ya se resolvió por el Juzgado accionado, y no hubo vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante.

La Corte Constitucional a este respecto ha dicho:

“...la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez

caería en el vacío". (Corte Constitucional, Sentencia T-519 16 Septiembre de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Como se cumplió por el accionado lo pretendido por el accionante al haberse ya resuelto las peticiones hechas en el proceso, y haberse dado el impulso procesal respectivo, es por lo que éste Juzgado, atendiendo los elementos de hecho que concurren en el presente caso no se accede a la protección impetrada por darse la situación de hecho superado.

Por tanto, no hay lugar a conceder la tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- **NEGAR** el amparo constitucional impetrado por **CENTRO COMERCIAL MICENTRO EL PORVENIR P.H. contra JUZGADO 09 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE, por darse** la situación de hecho superado.

2.- Notifíquesele a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3.- Remítase el expediente, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **58e97f99f1435f3505be9102aab6c9182eb1bb8005efd6774161e29823de4eb9**

Documento generado en 03/11/2022 08:11:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>